

La caída de Gutiérrez y la rebelión de abril

Presentación del dossier¹

Felipe Burbano

Profesor-investigador de Flacso-Ecuador

La caída de Lucio Gutiérrez tiene un enorme interés analítico por las continuidades que muestra de la política ecuatoriana en los últimos años, pero también por una serie de fenómenos nuevos cuya interpretación abre múltiples interrogantes sobre el futuro de la democracia. Parecería que el Ecuador se debate entre el agravamiento de la crisis de inestabilidad iniciada en 1997 con la destitución de Abdalá Bucaram, y el apareamiento de prácticas, discursos, luchas, unidas a nuevos actores sociales, que buscan cambiar las maneras de hacer política. El hartazgo, la frustración y el desencanto, se enfrentan a la búsqueda incesante, conflictiva, de nuevas formas de convivencia social y política. Como toda crisis, la actual no tiene un desenlace claro. Éste será el resultado de la capacidad política de las fuerzas involucradas en la confrontación.

El dossier que presenta *ÍCONOS* está dedicado a reflexionar sobre los alcances y consecuencias de la caída de Gutiérrez. Los artículos exploran diversas facetas del fenómeno: el papel de la clase media quiteña en las movilizaciones de abril, la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas, el apareamiento de formas de protesta no vinculadas a movimientos sociales y partidos políticos, el papel de las Fuerzas Armadas en el ordenamiento político, y la tensión creciente entre una complejidad de actores que im-

men sentidos distintos y contradictorios a la vida política nacional, son algunos de los temas que se abordan. Todos ellos abren perspectivas diferentes de interpretación sobre lo ocurrido.

La caída de Gutiérrez nos lleva a pensar inmediatamente en sus similitudes con las de Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad. Los artículos del dossier subrayan la activación, en los tres casos, de un mecanismo de legitimación de los derrocamientos presidenciales que va más allá del orden constitucional. Detrás de la inestabilidad, una constante. Se trata, en efecto, de la política en las calles, de las movilizaciones que han precedido a cada destitución y que sirvieron para legitimar los relevos presidenciales. Una tensión constante entre los marcos normativos de la democracia, con sus tiempos y límites, y la idea de que la democracia es, finalmente, la expresión de la soberanía popular, dondequiera que ésta se manifieste. Surgen dos preguntas en dirección opuesta. Por un lado, ¿cómo pensar los derrocamientos fuera de los marcos constitucionales? Por otro, ¿qué implicaciones tiene para la democracia el constante abandono de la Constitución en nombre de una difusa soberanía popular expresada en las calles?

El problema va más allá de sostener, de manera bastante general, la tesis de la precariedad institucional de la democracia ecuatoriana. Si bien resulta evidente que las instituciones han perdido la capacidad para organizar y procesar los conflictos sociales, y que los partidos aparecen como los principales res-

¹ Este dossier fue coordinado por Franklin Ramírez, y Felipe Burbano.



ponsables de la degradación política (“que se vayan todos”), la debilidad de las instituciones sólo muestra que en el Ecuador la política se mueve por otros canales, sigue otras lógicas y recurre a otros mecanismos para preservar intereses y privilegios. La continuidad de la crisis plantea como desafío preguntarse qué hay detrás de las débiles instituciones democráticas en el Ecuador.

De las tres experiencias recientes hemos aprendido que los relevos presidenciales son el resultado de pérdidas progresivas e insalvables de legitimidad de los presidentes, como plantea Catalina Pazmiño, acompañada de procesos de movilización social. Hay dos temas importantes que se analizan en el dossier sobre este punto: el primero, si fueron los mismos sectores sociales los que se movilizaron en las tres coyunturas. La conclusión, en palabras de Simón Pachano, es que no se puede identificar un actor socio político como

sujeto de los tres golpes. Los indígenas fueron protagonistas en las caídas de Bucaram y Mahuad, pero estuvieron ausentes en la última. Las clases medias no aparecieron en las movilizaciones contra Mahuad. Tampoco se puede establecer determinaciones similares en los derrocamientos. La caída de Mahuad estuvo presidida por una larga crisis económica; la de Gutiérrez ocurrió en un momento de estabilidad. Los relevos han afectado a políticos de signo tan opuesto como el moderno y muy racional Jamil Mahuad, y al loco e incontenible Abdalá Bucaram. Afectó a políticos de la costa y la sierra, a un miembro de la elite blanca y a un mestizo de origen popular. Dicho de modo directo, nadie se salvó.

El segundo tema va a contrapelo del primero. Se lo puede formular desde una pregunta: ¿los sucesivos relevos no expresan distintas maneras de redefinir la forma cómo las instituciones y los actores centrales de la polí-

tica conducen el Estado y se relacionan con la sociedad? ¿No hay, más allá de las particularidades de cada caso, un problema general con la política que reaparece una y otra vez?

Franklin Ramírez acude al concepto de “insurrección ciudadana” para referirse a las movilizaciones de abril. Con esa definición quiere diferenciarlas de las formas convencionales de oposición reconocidas por las democracias institucionalizadas. Mientras estas últimas se ejercen dentro de los límites fijados por el propio sistema político, la insurrección se genera en la exterioridad del sistema y tiene la capacidad de cuestionarlo como un todo. Se trataría de una insurrección respecto del “poder instituido”. No se puede desconocer la legitimidad de esas otras formas de ejercer la crítica a la dominación en sociedades donde las instituciones democráticas no tienen la capacidad para procesar las luchas en contra de la exclusión y la desigualdad. La insurrección, según Ramírez, constituye una suerte de ejercicio de la soberanía popular para establecer un control social sobre la política. Una suerte de “ciudadanía activa” que pretende constituirse en un medio de regulación y producción democrática. Los presupuestos de esa afirmación pueden aparecer como debilidades. Mirar las movilizaciones como expresiones de anhelos ciudadanos por construir la democracia, como si entre ellas no se habría dado motivaciones muy diferentes, resulta arriesgado. De otro lado, si miramos en retrospectiva lo ocurrido desde la caída de Abdalá Bucaram hasta la crisis de abril 2005, difícilmente se podría admitir una capacidad de esas insurrecciones para reconstituir la institucionalidad y democratizar la sociedad. Ramírez sostiene que la insurrección se afirma en la política ecuatoriana como un “derecho conquistado de la ciudadanía”; se ha instalado en el ordenamiento democrático ecuatoriano como una rutina de acción colectiva que se expresa en momentos de franca degradación de la política institucional. El desafío

dependerá de la capacidad para transformar las presiones episódicas en acumulados políticos e institucionales desde los cuales provocar una efectiva redistribución del poder político y social.

A contramano, Teodoro Bustamante intenta desmitificar precisamente aquellas visiones que interpretan los acontecimientos de abril como una confrontación entre el mundo corrupto y perverso de la política, y un movimiento forajido que encarna una ciudadanía más o menos constituida, con capacidad para inaugurar una nueva política. El riesgo de esta visión es caer en la trampa interpretativa de la traición: los movimientos ciudadanos son burlados, secuestrados, por una elite política cuya perversidad no tiene límites. La visión que opone a buenos contra malos, para simplificarla, se viene abajo si los buenos no son tanto como se los pinta; si los forajidos, predominantemente sectores de clase media quiteña, se movilizaron en abril para defender sus intereses y privilegios frente a un gobierno que los desplazaba. La clave estaría en comprender los dilemas y amenazas a los que se enfrentó la clase media quiteña. En una sociedad estamental, de corte feudal como la llama Bustamante, los privilegios del poder político deben distribuirse de acuerdo con un principio jerárquico. Dentro de esa lógica, violentarlo, alterarlo, sólo puede provocar una incomodidad general, un sentimiento de vulnerabilidad especialmente en los sectores medios. La osadía de un grupo social subordinado de atribuirse lugares dentro de la jerarquía que le están vedados, que asume roles que no les corresponde, y rompe con las jerarquías tradicionales, incomoda y desconcierta a todos. El gobierno de Gutiérrez trastocaba el mundo de la clase media - sus valores de ascenso y reconocimiento - al utilizar el Estado como un aparato desde donde sectores subordinados de la estructura social accedían a beneficios y privilegios.

El argumento merece mayor análisis. Se

reconoce que tanto en la caída de Bucaram como en la de Gutiérrez las movilizaciones sociales fueron protagonizadas principalmente por la clase media. Los dos presidentes, a su turno, manejaron un discurso de corte populista en el cual esos sectores no encuentran un espacio. La retórica populista enfrenta al pueblo, representado por el líder, contra la oligarquía. El Estado es un instrumento para golpear a la oligarquía y privilegiar al pueblo. La clase media queda excluida. Dos precisiones son necesarias. La primera, identificar bien dónde se encuentra esa clase media movilizadora. Si consideramos el movimiento forajido, concluiremos que se encuentra sólo en Quito. Esto es muy importante porque revela la diferencia de la capital con respecto al resto del país -quizá con la excepción de Cuenca- y plantea límites severos al movimiento ciudadano, si existe, en el contexto nacional. La sola constatación, por ejemplo, limita el argumento de Ramírez o lo hace más problemático pensado desde el heterogéneo escenario nacional. En segundo lugar, habría que preguntarse, tanto en las movilizaciones contra Bucaram como contra Gutiérrez, las articulaciones entre la clase media quiteña y las clases altas. No hay ninguna duda de que existen vínculos, de la presencia de unos vasos comunicantes, de espacios identitarios compartidos -por ejemplo, la ciudad-, aunque la que salga a las calles sea la clase media. De todos modos, habría que preguntarse qué les une y que les separa.

Bustamante plantea un argumento muy sugestivo. Se pregunta si el discurso de la democracia no es apenas una retórica de los sectores medios (quiteños) para defender, desde las ideas abstractas del Estado de derecho, la ciudadanía, los derechos universales, su lugar en el orden social. Me parece muy interesante el argumento. El discurso de la democracia se agota cuando la clase media asegura su posición en la estructura social, aún cuando sea con reconocimientos y posibilidades subordi-

nadas de ascenso y movilidad. Lo mínimo a lo que aspira es a echar del poder a quien pone en riesgo, frente a las elites y frente al pueblo, su propia ubicación social. La conclusión de este planteamiento lleva el debate a un terreno totalmente distinto: nada hay de democrático en las luchas de las clases medias. O si se quiere, para continuar con el argumento de Bustamante, esas luchas democratizadoras se ven limitadas por la presencia de una estructura social feudalizada, donde las clases altas tienen una enorme capacidad para preservar los rangos jerárquicos y los privilegios, aunque sea en un orden político degradado y siempre amenazante. El orden social se sustenta en un principio de respeto jerárquico: "Cada quien debe saber a quien puede atropellar, qué atropellos puede sufrir, y qué apoyos debe buscar para minimizar estos riesgos". Pachano sostiene que la clase media actúa cuando tiene una percepción de peligro y amenaza, como ocurrió con Bucaram y Gutiérrez. Le asigna a la clase media la función de anticuerpo que actúa cuando percibe la presencia de elementos extraños al sistema, como Bucaram y Gutiérrez; un anticuerpo que se moviliza para restablecer el equilibrio del sistema. Habría que preguntar, por un lado, ¿de qué equilibrio se habla? Y de otro, ¿por qué considerar a Bucaram y Gutiérrez como extraños al sistema? Todo sistema opera sobre unas líneas de exclusión, pero es evidente que en el caso ecuatoriano esas líneas hace tiempo que se volvieron difusas en el campo de la política. Distinto sería sostener que el equilibrio guarda relación con la idea de un orden social jerarquizado, donde la clase media encuentra algún espacio.

Gutiérrez, las FF.AA. y la política

El gobierno de Gutiérrez no se puede entender fuera de la relación de las Fuerzas Armadas con la política nacional. No debemos ol-



vidar que el Ecuador eligió a un ex coronel del ejército como presidente de la República. Si lo pensamos desde los ideales de la transición democrática de 1979, ese solo hecho revela la desaparición de la frontera que separaba al poder militar del civil. Esa frontera se removió en 1997 cuando las FF.AA. intervinieron en la caída de Bucaram. Fue el episodio que rompió con el pacto de la transición de 1979 y nos devolvió, en parte, a la tradición anterior. Tres años después de caída de Bucaram, se produjo la alianza de los coroneles con los indígenas para provocar la salida de Mahuad. La alianza intentó, recordémoslo, constituir un gobierno de salvación nacional, conformado por civiles y militares. El episodio fue cantinflesco -como lo definió Mahuad- pero revelador de cuánto se alteraron las relaciones entre civiles y militares. Las investigaciones revelaron más adelante que en esa alianza estuvieron involucrados algunos

generales, lo cual quiere decir el 21 de Enero fue bastante más que un alzamiento de coroneles.

No haber puesto la suficiente atención sobre esta trayectoria de la política ecuatoriana desde la caída de Bucaram, provocó una enorme sorpresa frente al triunfo presidencial de Gutiérrez. Su victoria tuvo como soporte al movimiento indígena y a Sociedad Patriótica, partido que representa la incorporación de una organización de militares al sistema político ecuatoriano. Bertha García sostiene que el ideario de Sociedad Patriótica “reproduce la versión politizada y tecnocrática de la seguridad nacional, aquella que llega a justificar la intervención militar directa en la política”. Gutiérrez llenó la administración pública de militares (Pacifictel, Petroecuador, Andinatel, las aduanas, el Fondo de Solidaridad, el IESS). Al mismo tiempo, intervino de modo directo en las Fuerzas Armadas para tener un

mando leal al presidente y a su gobierno. Los cuarteles se convirtieron en las tribunas preferidas del ex presidente para criticar a los políticos y pedir el respeto de las FF.AA. a la Constitución. Gutiérrez quería curarse en sano. Tenía plena conciencia de la precaria legitimidad de su gobierno. Sabía, también, que los gobiernos dependen, en última instancia, del respaldo de las Fuerzas Armadas.

Pero entre Gutiérrez y los militares hubo más que un juego de conveniencias mutuas para preservar sus intereses políticos e institucionales. Bertha García sostiene que las FF.AA. consideraron al gobierno de Gutiérrez como un gobierno militar. Había, por lo tanto, que “arrimar el hombro”. La idea de un gobierno militar se sustenta en una premisa: la incapacidad de los civiles para gobernar el país. Su discurso se ha matizado ligeramente en los últimos años para focalizar las críticas en los partidos políticos. De esta manera, los militares empatan con ese sentimiento de malestar ciudadano en contra de la clase política. Hay un puente constante que se tiende entre militares y civiles descontentos con la democracia. La identificación erosiona la legitimidad de las instituciones democráticas y lleva la política al campo de lo popular. Desde los años 60, los militares siempre intentaron arrebatarle al populismo la representación de lo nacional popular en contra de la oligarquía. Varios son los fenómenos que se desprenden de este prejuicio militar hacia los civiles: el papel tutelar que asumen frente a la política, percibirse como el corazón del Estado y encarnar el principio de unidad y soberanía nacional. Bertha García afirma que subsiste en el Ecuador un proyecto militar que se empeña en rescatar de manera recurrente los éxitos de las dictaduras, especialmente la de los años 70. Gutiérrez expresaba un intento por realizar ese proyecto militar en un contexto social y político distinto, y bajo el ropaje de un gobierno civil. Existe una continuidad ideológica -como la llama García- del proyec-

to militar para la sociedad ecuatoriana; un proyecto que no fue, según ella, abandonado con la transición a la democracia en 1979.

La presencia de “lo militar” en el gobierno se expresaba también en una forma de relacionarse con la oposición. García hace notar que la práctica política de Gutiérrez seguía la lógica militar del “ablandamiento”; esto es, desplegar de manera permanente un conjunto de “operaciones psicosociales” con el fin de “ablandar” a cualquier “enemigo externo”. Utilizó esas tácticas en contra de periodistas, diputados de la oposición, editorialistas, dirigentes indígenas y al final de su mandato contra León Febres Cordero, la oligarquía corrupta, los quiteños pelucones y aniñados (blancos por fuera, corruptos por dentro). En las semanas finales del gobierno, su lenguaje fue el de las contramarchas, en este mismo sentido de ablandamiento de quienes se le oponían. A raíz del intento de destitución por parte del PSC, la ID y Pachakutik en el Congreso, Gutiérrez identificó a sus adversarios y críticos como “enemigos externos”, a los cuales declaró la guerra. Su alianza con Bucaram fue parte de ese juego.

Teodoro Bustamante subraya un hecho importante: el poco respeto a la autoridad del



presidente por parte de sus críticos. A Gutiérrez se le podía decir cualquier cosa. Su figura se volvió extremadamente vulnerable en los espacios de debate público. Algo de la figura de Gutiérrez merecía poco respeto. ¿Su condición de clase? ¿Su condición de coronel? ¿Su condición étnica? El gobierno recurrió a la violencia para defenderse. Desde el grupo Cero Corrupción, que desafió a quienes protestaban delante de la Corte de Justicia, hasta la violencia verbal del propio coronel y de sus colaboradores, donde ocupó un lugar especial el ex ministro de Bienestar Social, Bolívar González. La violencia del gobierno se apartó del uso legítimo de la fuerza por parte de la autoridad, para convertirse en la violencia de una “banda rival”. Así fue interpretado el intento del gobierno de aplastar las protestas de abril en Quito con la llegada a la capital de grupos de matones el 20 de abril. Esa decisión agudizó la sensación de amenaza en contra de los quiteños opuestos al gobierno. Gutiérrez cometió el peor de los errores cuando todas las salidas políticas se le cerraban. Finalmente, perdió la guerra y huyó en el intento.

CIESPAL: el pálido reflejo de lo que vendría

Si algún momento condensa todo el complejo proceso de la caída de Gutiérrez es lo acontecido la tarde del 20 de abril en CIESPAL, donde el Congreso se reunió en la mañana para destituirlo y designar a Alfredo Palacio como presidente. Lo que pretendió ser un “relanzamiento institucional” de la democracia, bajo la tutela de los partidos opositores a Gutiérrez, terminó ensombrecido por los acontecimientos que se dieron en la tarde. Palacio estuvo varias horas sin el apoyo de las Fuerzas Armadas; los diputados que se encontraban dentro del edificio de CIESPAL fueron amenazados, golpeados, vejados; se produjeron saqueos; un coronel quiso proclamar un go-

bierno popular; nada deja de hacernos sospechar que allí se produjo un intento de golpe militar, quizá con la intención de convocar a elecciones anticipadas (la salida que le ofreció la cúpula militar a Gutiérrez antes de retirarle el apoyo).

CIESPAL condensa, desde el punto de vista de Edison Hurtado, la disputa de sentido sobre la política ecuatoriana en ese momento tan dramático. Condensa todas las contradicciones, tensiones, sin-sentidos del momento. La complejidad de lo que aconteció al interior del edificio mostraba que la caída de Gutiérrez podía tener muchos desenlaces posibles. Una mirada atenta, como la de Hurtado a lo ocurrido en CIESPAL, muestra que allí se produjo mucho más que un ritual de restauración de la democracia, si admitiéramos que la salida de Gutiérrez tendría ese final feliz. No nos ha quedado claro lo que aconteció en CIESPAL porque los medios minimizaron los acontecimientos mediante un discurso que habló de delincuentes, vándalos, huestes gutierristas, turbas de maleantes y salvajismo. Esos “no forajidos”, supuestos infiltrados, aparecieron para arruinar la fiesta democrática y la lucha cívica de la clase media quiteña (que mereció, dicho sea de paso, hasta los elogios de León Febres Cordero). Hurtado muestra cómo el discurso mediático simplificó maniqueamente la realidad. El discurso de los medios se presenta como un intento por construir un sentido ordenador de lo ocurrido, sin interesarse mucho por entender lo que realmente ocurría allí dentro. Edison Hurtado lanza algunas pistas. Una de ellas es la del “poder desamparado”, metáfora con la cual quiere mostrar la precariedad de la autoridad civil. Sin el respaldo de la Policía y las Fuerzas Armadas, Palacio no era nada. El vacío creado por los militares evidenció el chantaje al que está sometido el poder de los civiles, por un lado. Por otro, mostró que el orden descansa, en última instancia, en las Fuerzas Armadas.



Sin su contingente, el país es un caos, una banda de maleantes, con unos políticos que no gozan de ninguna consideración ni respeto de la ciudadanía. Políticos agredidos, vejados, golpeados. “Que se vayan todos”, como también gritó el coronel Servio Samaniego en su arenga golpista. Una segunda lectura es la violencia que allí imperó, con claros contenidos políticos. La violencia muestra la indignación moral hacia los políticos. Al intentar conjurarla, exorcizarla, los medios también querían contribuir a restablecer un orden en el cual los políticos pudieran volver a ocupar un lugar privilegiado, después de un *mea culpa*. Al estigmatizar la violencia en contra de los diputados, confundiéndola con la de una banda de delincuentes, se cerraron

los espacios para comprender la profundidad del malestar frente a la política. También intenta imponer, como dice Hurtado, casi un sentido normativo de la protesta; volver dóciles a los forajidos, civilizarlos a todos, cuando en ese movimiento hubo enorme heterogeneidad. Civilizar a los forajidos para contribuir a un reacomodo de fuerzas, a un simulacro democrático. Toda esa condensación de sentidos contradictorios, imposibles de ser exorcizados, han aparecido semanas después de caído Gutiérrez. Ni se ha restablecido la institucionalidad democrática, ni los políticos han cambiado sus malos hábitos, ni las Fuerzas Armadas se han replegado a sus cuarteles. CIESPAL expresó, de manera condensada, lo que vendría después.